


**CONTESTACION DEMANDA DE RECONVENCIÓN MARTA HELENA GUZMAN RAD.
41001310500120230039800**

Chavarro abogados A <abogado.josefrancisco@gmail.com>

Lun 29/01/2024 16:28

Para: Juzgado 01 Laboral Circuito - Huila - Neiva <lcto01nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Buzon ProcesosJudiciales <procesosjudiciales@colfondos.com.co>; npantoja@realcontract.com.co <npantoja@realcontract.com.co>

 1 archivos adjuntos (8 MB)

CONTESTACIÓN DEMANDA DE RECONVENCIÓN MARTHA HELENA GUZMAN.pdf;

Neiva, 29 de enero de 2024

Señores:

JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE NEIVA

Ref. PROCESO ORDINARIO LABORAL DE MARTHA HELENA GUZMAN MESA CONTRA COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, PORVENIR S.A. Y COLPENSIONES.

Rad. 41001310500120230039800

ASUNTO: CONTESTACIÓN DEMANDA DE RECONVENCIÓN DE COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS CONTRA MARTHA HELENA GUZMAN.

Comedidamente y muy respetuosamente, me permito contestar demanda de reconversión de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS CONTRA MARTHA HELENA GUZMAN, estando en término legal para ello.

Se envía la contestación a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS

Atentamente,

JOSE FRANCISCO CHAVARRO ARIAS

C.C. 1.075.253.491 de Neiva (H)

T.P. 264.268 Del Consejo Superior de la Judicatura.

APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE.

--

JOSE FRANCISCO CHAVARRO ARIAS

ABOGADO

Avenida 26 # 27-94 Neiva Huila Tel. 8758523-3185412183

Correo electrónico: abogado.josefrancisco@gmail.com

Señor:

JUEZ PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE NEIVA-HUILA
Ciudad

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA DE
MARTHA HELENA GUZMAN MESA CONTRA LA SOCIEDAD
ADMNISTRATIVA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A., COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS Y
LA ADMNISTRADORA COLOMBIA DE PENSIONES
COLPENSIONES

RAD. 41001310500120230039800

ASUNTO. CONTESTACION DEMANDA DE RECONVENCIÓN DE COLFONDOS
S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS CONTRA MARTHA HELENA
GUZMAN MESA.

JOSE FRANCISCO CHAVARRO ARIAS, mayor de edad, domiciliado en Neiva (Huila), abogado en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.253.491 de Neiva (H), con T. P. Nro. 264.268 del C. S. de la Judicatura, en calidad de apoderado de la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA, identificada con cédula de ciudadanía número 51.694.065 expedida en Bogotá (D.C.), de acuerdo a poder adjunto, con todo respeto, por medio del presente escrito presento CONTESTACIÓN DEMANDA DE RECONVENCIÓN DE COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, CONTRA MARTHA HELENA GUZMAN MESA, en los siguientes términos:

En cuanto a los HECHOS:

DEL PRIMERO AL TERCER HECHO : No es cierto, El prometedor panorama planteado por el asesor de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, indujo a mi poderdante, la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA, autorizar su traslado de afiliación, no siendo consciente en ese momento mi poderdante de las graves implicaciones de la decisión que tomaba porque fue inducido al error al ofrecerle supuestas ventajas y beneficios que le traería el traslado ya que el asesor de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS omitió información veraz y suficiente que no le permitieron a mi poderdante tener elementos de juicio claros y objetivos al momento de tomar la decisión de su traslado de régimen pensional, pues de percatarse de todos los riesgos y del verdadero capital real y suficiente que debería tener en la cuenta de ahorro individual para obtener una mejor pensión en el RAIS, nunca se hubiese trasladado ni pensionado.

La información verbal exigua y engañosa, que le brindó COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS se demuestra, con el hecho de que nunca en ese momento le hicieron una proyección del capital que debería acumular en el tiempo para obtener una pensión digna, con lo que se hubiera percatado de los mejores beneficios del régimen de Prima Media donde se encontraba afiliado al iniciar sus cotizaciones al sistema general de pensiones.

Además, el asesor del fondo nunca advirtió sobre los aspectos negativos, consecuencias negativas, los riesgos del fondo, sin mencionar ninguna desventaja del fondo, por el contrario, le aseguró pensionarse con un monto superior al de prima media y evitar perder las semanas cotizadas.

AL HECHO CUARTO: No es cierto, El prometedor panorama planteado por el asesor de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, indujo a mi poderdante, la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA, autorizar su traslado de afiliación, no siendo consciente en ese momento mi poderdante de las graves implicaciones de la decisión que tomaba porque fue inducido al error al ofrecerle supuestas ventajas y beneficios que le traería el traslado ya que el asesor de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS omitió información veraz y suficiente que no le permitieron a mi poderdante tener elementos de juicio claros y objetivos al momento de tomar la decisión de su traslado de régimen pensional, pues de percatarse de todos los riesgos y del verdadero capital real y suficiente que debería tener en la cuenta de ahorro

individual para obtener una mejor pensión en el RAIS, nunca se hubiese trasladado ni pensionado.

Con relación a los términos de retracto y de la acción rescisoria, resulta imperativo recordar que, la Corte Suprema ha venido sosteniendo que tal disposición es improcedente en materia de seguridad social, como quiera que el término preclusivo resulta regresivo, y contrario al ordenamiento superior, concretamente, a los principios consagrados en el artículo 48 de la carta política, que ampara a la seguridad social como un derecho irrenunciable y tiene como uno de sus báculos, el principio de progresividad" (Sala Laboral Sentencia del 30 de Abril de 2014, radicación 43892).

Queremos reiterar que fue de tal grado el convencimiento erróneo que logró el asesor en el sentido de que COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS era lo mejor para lograr una pensión al cumplir la edad, sin mencionar ninguna desventaja o riesgo, pues no había lugar a dudar ni a preocuparse por tal motivo y lo que sí demuestra tal paso del tiempo es que después del engaño en el COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, jamás volvió a acordarse de su cliente, nunca le hizo un acompañamiento debido, al contrario la mantuvo en el error, a pesar de que no es solo lograr que firmen un formulario sino que es obligación de las Administradoras de Fondos de Pensiones hacer acompañamiento antes, durante y hasta que el usuario logre la pensión prometida, pero nunca lo hicieron habiendo podido en tan largo tiempo revisar y no esperar a la consolidación del daño ocasionado. por las mismas razones no se trasladó 10 años antes de la edad de pensión por cuanto por el panorama planteado por el asesor no era necesario y porque además la declaración de ineficacia de traslado de régimen pensional el imprescriptible en las voces de la sentencia SL-16892019 (65791) del 8 de mayo de 2019 M.P. Clara Cecilia dueñas Quevedo.

AL HECHO QUINTO Y SEXTO: No es cierto, El prometedo panorama planteado por el asesor de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, indujo a mi poderdante, la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA, autorizar su pensión, no siendo consciente en ese momento mi poderdante de las graves implicaciones de la decisión que tomaba porque fue inducido al error al ofrecerle supuestas ventajas y beneficios que le traería pensionarse, ya que el asesor de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS omitió información veraz y suficiente que no le permitieron a mi poderdante tener elementos de juicio claros y objetivos al momento de tomar la decisión de pensión, pues de percatarse de todos los riesgos y del verdadero capital real y suficiente que debería tener en la cuenta de ahorro individual para obtener

una mejor pensión en el RAIS, nunca se hubiese pensionado y hubiese iniciado el proceso de cambio de régimen pensional al que tiene derecho.

Queremos reiterar que fue de tal grado el convencimiento erróneo que logró el asesor en el sentido de que COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS era lo mejor para lograr una pensión al cumplir la edad, sin mencionar ninguna desventaja o riesgo, pues no había lugar a dudar ni a preocuparse.

AL HECHO SÉPTIMO: Ciertamente, se le pagó su primera mesada partir de diciembre del año 2020, como consta en el oficio de aprobación de su pensión, en el que claramente señala que su primera mesada será pagada en diciembre del año 2020.

Es importante mencionar que, la demanda fue enviada por correo electrónico el día 25 de noviembre de 2023, a la oficina de reparto laboral de la ciudad Neiva-Huila, de la rama judicial, correo: RepartoLaboralNVa@cendoj.ramajudicial.gov.co, antes del cierre de horario, es decir, antes de las 5:P.M.

Sin embargo, por error de la oficina de reparto de Neiva-Huila (Rama judicial), lo radicó sólo después de 3 días, es decir, hasta el 28 de noviembre de 2023.

Ahora bien, también es importante aclarar la primera mesada fue pagada solo hasta diciembre 2020, por lo tanto, el reconocimiento pensional se materializó a partir de esta fecha.

Por otro lado, mediante oficios del 20 y 21 de noviembre del 2023 se solicitó a COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A. la nulidad y/o ineficacia del traslado de régimen de Prima Media al de Ahorro Individual, o en su defecto, la indemnización plena de perjuicios a cargo del fondo por trasgredir el deber de información al momento del traslado de régimen pensional.

Por lo que, el termino de prescripción se interrumpió en virtud del artículo 489 del Código Sustantivo del trabajo. Cuando señala:

“El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente”

Así las cosas, igualmente el termino de prescripción quedo interrumpido desde el simple reclamo, es decir, desde el 20 y 21 de noviembre del 2023, cuando se hicieron las reclamaciones iniciales.

El prometedor panorama planteado por el asesor de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, indujo a mi poderdante, la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA, autorizar su pensión, no siendo consciente en ese momento mi poderdante de las graves implicaciones de la decisión que tomaba porque fue inducido al error al ofrecerle supuestas ventajas y beneficios que le traería pensionarse, ya que el asesor de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS omitió información veraz y suficiente que no le permitieron a mi poderdante tener elementos de juicio claros y objetivos al momento de tomar la decisión de pensión, pues de percatarse de todos los riesgos y del verdadero capital real y suficiente que debería tener en la cuenta de ahorro individual para obtener una mejor pensión en el RAIS, nunca se hubiese pensionado y hubiese iniciado el proceso de cambio de régimen pensional al que tiene derecho.

Queremos reiterar que fue de tal grado el convencimiento erróneo que logró el asesor en el sentido de que COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS era lo mejor para lograr una pensión al cumplir la edad, sin mencionar ninguna desventaja o riesgo, pues no había lugar a dudar ni a preocuparse.

AL HECHO OCTAVO: No es cierto, El prometedor panorama planteado por el asesor de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, indujo a mi poderdante, la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA, autorizar su pensión, no siendo consciente en ese momento mi poderdante de las graves implicaciones de la decisión que tomaba porque fue inducido al error al ofrecerle supuestas ventajas y beneficios que le traería pensionarse, ya que el asesor de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS omitió información veraz y suficiente que no le permitieron a mi poderdante tener elementos de juicio claros y objetivos al momento de tomar la decisión de pensión, pues de percatarse de todos los riesgos y del verdadero capital real y suficiente que debería tener en la cuenta de ahorro individual para obtener una mejor pensión en el RAIS, nunca se hubiese pensionado y hubiese iniciado el proceso de cambio de régimen pensional al que tiene derecho.

Queremos reiterar que fue de tal grado el convencimiento erróneo que logró el asesor en el sentido de que COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS era lo mejor para lograr una pensión al cumplir la edad, sin mencionar ninguna desventaja o riesgo, pues no había lugar a dudar ni a preocuparse.

AL HECHO NOVENO: No es cierto, El prometedor panorama planteado por el asesor de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, indujo a mi poderdante, la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA, autorizar su traslado de afiliación, ni su pensión, no siendo consciente en ese momento mi poderdante de las graves implicaciones de la decisión que tomaba porque fue inducido al error al ofrecerle supuestas ventajas y beneficios que le traería el traslado ya que el asesor de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS omitió información veraz y suficiente que no le permitieron a mi poderdante tener elementos de juicio claros y objetivos al momento de tomar la decisión de su traslado de régimen pensional, pues de percatarse de todos los riesgos y del verdadero capital real y suficiente que debería tener en la cuenta de ahorro individual para obtener una mejor pensión en el RAIS, nunca se hubiese trasladado o pensionado.

HECHO DÉCIMO: No es cierto, En este caso, ninguna prueba permite establecer que el traslado al régimen de ahorro individual por parte de la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA, se hubiese realizado bajo los parámetros de libertad informada y transparencia mínimos, porque PORVENIR S.A, ni COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS no cumplieron con su deber legal de brindarle una información adecuada, suficiente, cierta y comprensible sobre las etapas del proceso de afiliación; y sobre los beneficios e inconvenientes que le generaría el traslado del régimen de prima media con prestación definida al de Ahorro Individual con Solidaridad.

Por el contrario, mientras en el Régimen de Ahorro Individual donde se encuentra actualmente pensionada mi poderdante solo alcanzó a una pensión del mínimo (garantía de la pensión mínima), a sus 57 años de edad, mientras que en el Régimen de Prima Media de Colpensiones a esa misma edad hubiese recibido una pensión aproximada de \$3.683.429, teniendo en cuenta el ingreso base de liquidación correspondiente al promedio de los 10 últimos años de servicio y aplicando la reglamentación y la formula prevista en la ley 797 de 2003 para obtener el monto de la pensión de vejez, corresponde éste al 80% del ingreso Base de liquidación (IBL \$4.604.286), tal como se prueba con la proyección pensional y la simulación que se anexa a la presente, valor que sin duda le era más favorable y que repercutió en su calidad de vida y en el de su familia.

Por lo anterior, mi poderdante sufrió un perjuicio económico y moral consolidado y futuro, por la diferencia pensional entre la prestación reconocida en el RAIS y aquella hubiese tenido en el RPMD.

Debido a la baja pensión reconocida por el fondo (salario mínimo) mi poderdante se ha visto sometida a la angustia y estrés mes a mes para cumplir con sus obligaciones financieras, como responder por el contrato de LEASING HABITACIONAL BANCOLOMBIA Nro. 217262, viéndose en la necesidad de adquirir nuevas deudas para no perder su casa, lo que de haberse pensionado con Colpensiones sus obligaciones serían cumplidas sin contratiempo.

Por otro lado:

la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencia SL1113-2022, ha enseñado que el pensionado en el RAIS que se considere lesionado en su derecho puede obtener la reparación de los perjuicios irrogados por las AFP omisas del deber de información y correcta asesoría en el momento de realizarse el traslado de régimen pensional desde el RPMPD, bien a través de la acción principal y directa de indemnización total de perjuicios, o bien de la acción de ineficacia del traslado de régimen pensional con pretensión subsidiaria indemnizatoria, siempre que, por lo menos, así se planteó en el petitum de la demanda y en los hechos fundantes de la misma y se haya tenido oportunidad de discutirlos en el proceso. Dijo la CSJ en la referida providencia, lo siguiente:

“...no significa que el pensionado que se considere lesionado en su derecho no pueda obtener su reparación. Es un principio general del derecho aquel según el cual quien comete un daño por culpa, está obligado a repararlo (art. 2341 CC). Por consiguiente, si un pensionado considera que la administradora incumplió su deber de información (culpa) y, por ello, sufrió un perjuicio en la cuantía de su pensión, tiene derecho a demandar la indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora. (...).

DECIMO PRIMERO: No es cierto, es una apreciación subjetiva por la parte actora, teniendo en cuenta que el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 consagra el principio de reparación integral en la valoración de los daños. Este principio conmina al juez a valorar la totalidad de los daños irrogados a la víctima y en función de esta apreciación, adoptar las medidas compensatorias que juzgue conveniente según la situación particular del afectado. Es decir, el juez, en vista a reparar integralmente los perjuicios ocasionados, debe explorar y utilizar todas aquellas medidas que considere necesarias para el pleno y satisfactorio restablecimiento de los derechos conculcados. En la medida que el daño es perceptible o apreciable en toda su magnitud desde el momento en

que se tiene la calidad de pensionado, el término de prescripción de la acción debe contarse desde este momento”.

En ese sentido, mi poderdante sufrió un perjuicio económico y moral consolidado y futuro, por la diferencia pensional entre la prestación reconocida en el RAIS y aquella hubiese tenido en el RPMD.

Además, debido a la baja pensión reconocida por el fondo (salario mínimo) mi poderdante se ha visto sometida a la angustia y estrés mes a mes para cumplir con sus obligaciones financieras, como responder por el contrato de LEASING HABITACIONAL BANCOLOMBIA Nro. 217262, viéndose en la necesidad de adquirir nuevas deudas para no perder su casa, lo que de haberse pensionado con Colpensiones sus obligaciones serían cumplidas sin contratiempo.

Por lo tanto, como medio de reparación integral, solicito al señor juez condenar a la parte actora a perder las mesadas pagadas hasta la fecha.

FRENTE A LAS DECLARACIONES Y CONDENAS

Nos oponemos a cada una de las declaraciones y condenas pretendidas por COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, en los siguientes términos:

A LA PRIMERA: NOS OPONEMOS, la falta de información al momento del cambio de régimen si genera la ineficacia del cambio de régimen. Es preciso reiterar el criterio jurisprudencial contenido en la providencia SL- 13 de marzo de 2013 RAD: 42787, y ratificado recientemente en sentencia SL-radicado 88826 del 28 de julio de 2021 en el sentido, de que la afiliación o traslado de régimen pensional, no es dable deducirlo con el simple diligenciamiento, firma y entrega del formulario de afiliación y en los términos del artículo 1604 del Código Civil, corresponde a las administradoras de fondos de pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados. Allí debe constar que se informó sobre los aspectos positivos y negativos de la vinculación, así como la incidencia en el derecho pensional, los cuales, de no ser ciertos, tendrán, además, las sanciones pecuniarias del artículo 271 de la ley 100 de 1993.

A LA SEGUNDA: NOS OPONEMOS, por el contrario, debido al engaño por parte del fondo privado y al faltar al deber de información, se debe declarar nulo o ineficaz el cambio de régimen y por consiguiente nulo y/o ineficaz el

reconocimiento pensional. La más reciente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia SL-843202022 (85499) del 16 de marzo de 2022, donde ratifica que se requirió que la AFP acredite que efectivamente le brindó al afiliado una información completa, clara, integral y oportuna acerca de las características, ventajas, desventajas, condiciones económicas y funcionamiento del RAIS (M.P. Gerardo Botero Zuluaga), que para el caso concreto nunca ocurrió.

A LA TERCERA: NOS PONEMOS, teniendo en cuenta que el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 consagra el principio de reparación integral en la valoración de los daños. Este principio conmina al juez a valorar la totalidad de los daños irrogados a la víctima y en función de esta apreciación, adoptar las medidas compensatorias que juzgue conveniente según la situación particular del afectado. Es decir, el juez, en vista a reparar integralmente los perjuicios ocasionados, debe explorar y utilizar todas aquellas medidas que considere necesarias para el pleno y satisfactorio restablecimiento de los derechos conculcados. En la medida que el daño es perceptible o apreciable en toda su magnitud desde el momento en que se tiene la calidad de pensionado, el término de prescripción de la acción debe contarse desde este momento”.

En ese sentido, mi poderdante sufrió un perjuicio económico y moral consolidado y futuro, por la diferencia pensional entre la prestación reconocida en el RAIS y aquella hubiese tenido en el RPMD.

Además, debido a la baja pensión reconocida por el fondo (salario mínimo) mi poderdante se ha visto sometida a la angustia y estrés mes a mes para cumplir con sus obligaciones financieras, como responder por el contrato de LEASING HABITACIONAL BANCOLOMBIA Nro. 217262, viéndose en la necesidad de adquirir nuevas deudas para no perder su casa, lo que de haberse pensionado con Colpensiones sus obligaciones serían cumplidas sin contratiempo.

Por lo tanto, como medio de reparación integral, solicito al señor juez condenar a la parte actora a perder las mesadas pagadas hasta la fecha.

FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO

Son fundamentos jurídicos de la presente demanda las siguientes normas:

Ley 100 de 1993, artículo 106 que trata sobre la publicidad y promoción de las actividades de las administradoras de fondos de pensiones que deben sujetarse a las normas que sobre el particular determine la Superintendencia Bancaria- hoy financiera- la cual debe ser verás y precisa, que permita escoger la mejor opción, circunstancias que estuvieron ausentes para el caso de mi poderdante.

Ley 100 de 1993, artículo 96, se refiere a que todo plan de pensiones debe ser sometido a consideración de su Superintendencia Bancaria, hoy Financiera- para su aprobación el cual deberá amparar a los afiliados contra todos los riesgos a que hace referencia la ley. Para el caso concreto, no se le hizo ningún plan de pensión y no se previeron los riesgos a que estaría sometido mi poderdante.

Ley 100 de 1993 artículo 60 literal j) estipula que la vigilancia de las entidades administradoras de fondos de pensiones le corresponde a la Superintendencia Bancaria- hoy Financiera- que hace parte del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, por lo tanto, a mi poderdante era beneficiaria de las normas de ese estatuto, Decreto 663 de 1993, que es anterior a la actuación de PORVENIR S.A. con mi prohijado en el año 1998 cuando la indujeron erróneamente al cambio de régimen.

Ley 100 de 1993 artículo 106, en el sentido que ordena que toda publicidad o promoción de las actividades de las administradoras de pensiones deberá sujetarse a las normas que sobre el particular determine la Superintendencia Bancaria-hoy Financiera- en orden a velar porque aquella sea verás y precisa. Demostrado está que esto no se hizo con mi poderdante contrariando claramente lo estipulado por la ley por parte de PORVENIR S.A.

Decreto 663 de 1993 artículo 97, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero consagra que las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas. Estos requisitos no fueron aplicados para el caso de mi poderdante.

Decreto 656 de 1994 artículo 35, Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones se regirán por las disposiciones especiales de la Ley 100 de 1993 y el presente Decreto y, en lo no previsto en ellos y en su orden, por las normas aplicables a las sociedades de servicios financieros y a las instituciones financieras. Lo que corrobora las normas aplicables para el caso de mi poderdante.

Ley 795 de 2003 artículo 23, éste modifica el numeral 1 del artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:

"1. Información a los usuarios. Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas. Es decir que reitera lo preceptuado por el Decreto 663 de 1993, que no fue aplicado a mi poderdante al momento de la asesoría.

Decreto 656 de 1994 artículo 15, Todo fondo de pensiones deberá tener un plan de pensiones y un reglamento de funcionamiento aprobados de manera previa e individual por la Superintendencia Bancaria. El reglamento debe contener, a lo menos, las siguientes previsiones:

- a) Los derechos y deberes de los afiliados y de la administradora;**
- b) El régimen de gastos conforme a las disposiciones que establezca la Superintendencia Bancaria, y**
- c) Las causales de disolución del fondo.**

El texto del reglamento, así como del respectivo plan, deberá ser entregado a cada afiliado a más tardar al momento de su vinculación.

Los reglamentos deberán ser redactados de forma tal que sean de fácil comprensión para los afiliados y la copia que de los mismos se entregue a éstos deberá emplear caracteres tipográficos fácilmente legibles. A mi poderdante no le entregaron ni plan de pensión ni el reglamento.

Ley 1328 de 2009 artículo 3°, trae los principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas-dentro de ellas las administradoras de pensiones. Uno de esos principios rectores es la Transparencia e información cierta, suficiente y oportuna PORVENIR S.A. transgredió este principio para el caso de mi poderdante.

Ley 1748 de 2014 Parágrafo 1° del Artículo 2°, indica como requisito para el traslado de régimen la obligación de brindar doble asesoría, es decir hacerle la proyección para ambos regímenes, para que el usuario pueda tomar una decisión acertada, PORVENIR S.A. nunca ofreció lo anterior a mi poderdante.

Decreto 2071 de 2015, ratifica lo establecido desde 1993 en el sentido de la obligación de las administradoras de pensiones de brindar información veraz, suficiente y oportuna a los usuarios para que puedan escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones bien informadas.

Código Civil Colombiano, artículos 1508 y 1511, advierten sobre la ocurrencia del error de hecho y la forma en que vicia el consentimiento, aplicable al caso concreto, reforzados por la Sentencia C-993 del 29 de Noviembre de 2006 de la Corte Constitucional en el sentido que se deben respetar las normas imperativas y el orden público lo que lógicamente exige una mayor carga de claridad y diligencia de las partes del negocio en su celebración, para evitar las consecuencias adversas del negocio celebrado con ese tipo de vicio.

En ese sentido, encontramos la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral del 09 de septiembre de 2008, con Radicado No. 31989 y ponencia del Magistrado EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS, que argumentó lo siguiente:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad.

Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

“La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.

“En estas condiciones el engaño, no solo se produce en lo que se afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de decisión que se persigue; de esta manera la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad demandada.

“No desdice la anterior conclusión, lo asentado en la solicitud de vinculación a la Administradora de Pensiones que aparece firmada por el demandante, que su traslado al régimen de ahorro individual se dio de

manera voluntaria, que "se realizó de forma libre, espontánea y sin presiones", pues lo que se echa de menos es la falta de información veraz y suficiente, de que esa decisión no tiene tal carácter si se adopta sin el pleno conocimiento de lo que ella entraña."

"En consecuencia, también en este aspecto es prospero el cargo, y para la definición de instancia son suficientes las anteriores consideraciones, para revocar la sentencia de primer grado, y en su lugar, declarar la nulidad del traslado que el demandante hizo del Instituto de Seguros Sociales a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., quien por virtud del regreso automático al régimen de prima con prestación definida del ISS., deberá devolver a ésta todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado."(Negrilla y subraya fuera del texto)

Así mismo existen otros pronunciamientos de la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre el mismo tema y sentido con son la sentencia radicación 31314 del 6-12-11; Sentencia radicación 33083 del 22-11-11; Sentencia radicación 46292 SL-12136-2014 del 3 de septiembre de 2014 MP Dra. ELCY DEL PILAR CUELLO CLDERON, Sentencia SL-1688 DEL 8 DE MAYO DE 2019 M.P. Dra. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.

Por su parte, la sentencia SL-1452 de 2019 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, indica que no basta la firma del formulario de traslado para probar que la decisión se tomó de manera voluntaria y consentida, recalca el deber de información a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones es exigible desde su creación, la información debe ser clara completa necesaria y transparente, además la constatación del deber de información es ineludible y la obligación de demostrar la entrega de documentación clara y suficiente donde consten los efectos que acarrea el cambio de régimen y que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación no es suficiente para demostrar el consentimiento informado.

Son también concordantes las sentencias SL-1421 de 2019, SL-1688 de 2019, SL-1699 de 2019.

Sentencia de la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia SL- 56862021 (82139) del 6 de octubre de 2021, donde ratifica la Ineficacia del traslado pensional cuando no se acredita en el juicio el cumplimiento del deber de

información en el traslado inicial, sin importar los tránsitos que los afiliados hagan entre administradoras privadas de ese esquema.

La más reciente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia SL-843202022 (85499) del 16 de marzo de 2022, donde ratifica que se requiere que la AFP acredite que efectivamente le brindó al afiliado una información completa, clara, integral y oportuna acerca de las características, ventajas, desventajas, condiciones económicas y funcionamiento del RAIS (M.P. Gerardo Botero Zuluaga)

Por otro lado:

la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencia SL1113-2022, ha enseñado que el pensionado en el RAIS que se considere lesionado en su derecho puede obtener la reparación de los perjuicios irrogados por las AFP omisas del deber de información y correcta asesoría en el momento de realizarse el traslado de régimen pensional desde el RPMPD, bien a través de la acción principal y directa de indemnización total de perjuicios, o bien de la acción de ineficacia del traslado de régimen pensional con pretensión subsidiaria indemnizatoria, siempre que, por lo menos, así se plantee en el petitum de la demanda, o en los hechos fundantes de la misma y se haya tenido oportunidad de discutirlos en el proceso. Dijo la CSJ en la referida providencia, lo siguiente:

“...no significa que el pensionado que se considere lesionado en su derecho no pueda obtener su reparación. Es un principio general del derecho aquel según el cual quien comete un daño por culpa, está obligado a repararlo (art. 2341 CC). Por consiguiente, si un pensionado considera que la administradora incumplió su deber de información (culpa) y, por ello, sufrió un perjuicio en la cuantía de su pensión, tiene derecho a demandar la indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora. (...).

El artículo 16 de la Ley 446 de 1998 consagra el principio de reparación integral en la valoración de los daños. Este principio conmina al juez a valorar la totalidad de los daños irrogados a la víctima y en función de esta apreciación, adoptar las medidas compensatorias que juzgue conveniente según la situación particular del afectado. Es decir, el juez, en vista a reparar integralmente los perjuicios ocasionados, debe explorar y utilizar todas aquellas medidas que considere necesarias para el pleno y satisfactorio restablecimiento de los derechos conculcados. En la medida que el daño es perceptible o apreciable en toda su magnitud desde el momento en que se tiene la calidad de pensionado, el término de prescripción de la acción debe contarse desde este momento”. (Subraya la Sala).

Sobre la posibilidad de solicitar la indemnización de perjuicios en tratándose de pensionados que se trasladaron del RPMPD al RAIS, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, ha señalado que «si un pensionado considera que la administradora incumplió su deber de información (culpa) y, por ello, sufrió un perjuicio en la cuantía de su pensión, tiene derecho a demandar la indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora», ello teniendo en cuenta el principio general del derecho según el cual, «quien comete un daño por culpa, está obligado a repararlo (art. 2341 CC)». Lo adocctrinado por el órgano de cierre de la Jurisdicción Ordinaria Laboral se sustenta en que la acción de indemnización de perjuicios, no es ajena al derecho laboral y de la seguridad social.

En la que en efecto cabe la reparación del daño por la responsabilidad imputable a la AFP, siempre que el petitum de la demanda esté encausado en ese sentido, como en el caso de autos, en donde se pretende que se reconozca a cargo de las AFP del RAIS llamadas a juicio, a título de indemnización de perjuicios, la diferencia de la mesada pensional que le hubiere correspondido a la promotora de la acción en el RPMPD.

Por lo tanto, el caso concreto de mi poderdante, el juez debe hacer una valoración de la indemnización plena de perjuicios en la modalidad de lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro.

Ahora bien, resulta necesario remitirnos a lo adocctrinado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC282-2021, en la que expuso lo siguiente: “El daño, como el elemento nuclear de la responsabilidad, consiste en el menoscabo que la conducta dañosa del victimario irroga al patrimonio, sentimientos, vida de relación o bienes de especial protección constitucional de la víctima. Se trata de «una modificación de la realidad que consiste en el desmejoramiento o pérdida de las condiciones en las que se hallaba una persona o cosa por la acción de las fuerzas de la naturaleza o del hombre. Pero desde el punto de vista jurídico, significa la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acción u omisión humana, que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacción a manera de reparación o, al menos, de satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición del agravio» (CSJ, SC10297, 5 ag. 2014, rad. n.º 2003-00660-01; reiterada SC2758, 16 jul. 2018, rad. n.º 1999-00227-01).

En otras palabras, «es ‘todo detrimento, menoscabo o deterioro, que afecta bienes o intereses lícitos de la víctima, vinculados con su patrimonio, con su esfera espiritual o afectiva, o con los bienes de su personalidad’» (SC16690, 17 nov. 2016, rad. n.º 2000-00196-01). 2.1.2. Para que el daño sea susceptible de ser reparado se requiere que sea «‘directo y cierto’ y no

meramente 'eventual o hipotético', esto es, que se presente como consecuencia de la 'culpa' y que aparezca 'real y efectivamente causado' (Sentencias de 26 de enero de 1967 (CXIX, 11-16) y 10 de mayo de 1997, entre otras)» (SC, 27 mar. 2003, exp. n.º C-6879); asimismo, debe afectar un interés protegido por el orden jurídico (SC13925, 30 sep. 2016, rad. n.º 2005-00174-01). (...) El principio de reparación integral propugna porque la víctima de un daño sea restablecida a la situación en que se encontraría de no haber sufrido el agravio, de suerte que se mantenga indemne de las consecuencias negativas del hecho culposo.

Por tanto, «el resarcimiento no puede superar la pérdida efectiva, ni generar una ventaja para el damnificado». La Corte, refiriéndose a este principio, ha ordenado «que al afectado por daños en su persona o en sus bienes, se le restituya en su integridad o lo más cerca posible al estado anterior..., y por eso, acreditada la responsabilidad civil, el juez 'tendrá que cuantificar el monto de la indemnización en concreto, esto es que habrá de tomar en consideración todas las circunstancias específicas en que tuvo lugar el daño, su intensidad, si se trata de daños irrogados a las personas o a las cosas, y la forma adecuada de resarcir el perjuicio» (SC, 18 dic. 2012, rad. n.º 2004-00172-01, reiterada en SC22036, 19 dic. 2017, rad. n.º 2009-0014-01).» (Lo subrayado no lo está en el texto original).

Extrapolando las anteriores consideraciones al caso concreto, a la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA, se le ha ocasionado un daño que debe ser reparado por las AFP del RAIS a las que estuvo afiliada, considerando este cuerpo colegiado que ello sí acontece, en razón a que ninguna de las encartadas cumplió con el deber de información al momento del traslado de régimen pensional del RPMPD al RAIS.

No cumplieron con su deber de información frente a la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA a efectos de que esta pudiera advertir las consecuencias que frente a su pensión de vejez tendría el acto de traslado y su permanencia en el régimen privado hasta alcanzar el derecho pensional, ya que ninguna informó a su entonces afiliada sobre su derecho de retracto y la posibilidad que tenía de retornar al RPMPD hasta antes del límite de temporal establecido en el literal d) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 y también las consecuencias adversas del traslado de régimen, mismas que no fueron explicitadas previo al momento de efectuarse el traslado de régimen, ni los posteriores traslados horizontales.

Por lo tanto, esa diferencia pensional es la que precisamente materializa el daño patrimonial generado por la falta de información (culpa), que le es atribuible a las AFP del RAIS demandadas, pues así lo explicó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL3535-2021, en los siguientes términos: "Por consiguiente, siempre que dicha pretensión sea

plasmada en la demanda -lo que en este caso no ocurrió-, bien podría el juez ordenar a título de indemnización de perjuicios el pago a cargo de la AFP de la diferencia entre la prestación reconocida en el RAIS y aquella que hubiese tenido en el RPMPD. Esto es, imponer el pago de una renta periódica en los mismos términos en que lo habría hecho el régimen de prima media con prestación definida, tanto para el pensionado como para sus potenciales beneficiarios, ordenando compensar o restituir todo aquello a lo que haya lugar”.

resulta pertinente traer a colación lo dicho por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (SL373-2021), en torno de la concreción del daño, al resaltar que: “el daño es perceptible o apreciable en toda su magnitud desde el momento en que se tiene la calidad de pensionado”, lo que en efecto se presenta en el caso bajo estudio, pues la falta al deber de información detallada e íntegra por parte de las AFP previo al momento de la afiliación, determinante de su consentimiento, su permanencia y pleno y satisfactorio disfrute de la pensión, privó a la demandante de la oportunidad de pensionarse con mejores condiciones en el RPMPD, visto que en el ámbito de la responsabilidad subjetiva se denomina “pérdida de oportunidad” como daño reparable, dentro de las siguientes condiciones:

“La Sala, asimismo, en oportunidad reciente, se refirió a “la pérdida de una oportunidad” como “la frustración, supresión o privación definitiva de la oportunidad legítima, real, verídica, seria y actual para la probable y sensata obtención de un provecho, beneficio, ventaja o utilidad a futuro o, para evitar una desventaja, pérdida o afectación ulterior del patrimonio” y luego de hacer mención de las diferentes tesis que plantea la doctrina respecto de la naturaleza del detrimento que se estudia, concluyó que “[a]l margen de la problemática precedente, la pérdida de una oportunidad cierta, real, concreta y existente al instante de la conducta dañosa para obtener una ventaja esperada o evitar una desventaja, constituye daño reparable en el ámbito de la responsabilidad contractual o en la extracontractual. (Sentencia del 01 de noviembre de 2013, ref.: 08001-3103-008-1994-26630-01, Sala de Casación Civil)”

EXCEPCIONES DE FONDO:

EXCEPCIONES DE FONDO:

1. DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL:

Teniendo en cuenta que el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 consagra el principio de reparación integral en la valoración de los daños. Este principio permite al juez a valorar la totalidad de los daños irrogados a la víctima y en función de esta apreciación, adoptar las medidas compensatorias que juzgue

conveniente según la situación particular del afectado. Es decir, el juez, en vista a reparar integralmente los perjuicios ocasionados, debe explorar y utilizar todas aquellas medidas que considere necesarias para el pleno y satisfactorio restablecimiento de los derechos conculcados. En la medida que el daño es perceptible o apreciable en toda su magnitud desde el momento en que se tiene la calidad de pensionado, el término de prescripción de la acción debe contarse desde este momento”.

En ese sentido, mi poderdante sufrió un perjuicio económico y moral consolidado y futuro, por la diferencia pensional entre la prestación reconocida en el RAIS y aquella hubiese tenido en el RPMD.

Ahora bien, debido a la baja pensión reconocida por el fondo (salario mínimo) mi poderdante se ha visto sometida a la angustia y estrés mes a mes para cumplir con sus obligaciones financieras, como responder por el contrato de LEASING HABITACIONAL BANCOLOMBIA Nro. 217262, viéndose en la necesidad de adquirir nuevas deudas para no perder su casa, lo que de haberse pensionado con Colpensiones sus obligaciones serían cumplidas sin contratiempo.

Por lo tanto, como medio de reparación integral, solicitamos al señor juez condenar a la parte actora a perder las mesadas pagadas hasta la fecha.

2. MALA FE DE COLFONDOS S.A. Y BUENA FE DE MI REPRESENTADA:

Debo señalar que mi representada siempre ha obrado de buena fe, debido a que nunca fue advertida de las consecuencias y riesgos del cambio de régimen y prueba de ello es que en este caso, ninguna prueba permite establecer que el traslado al régimen de ahorro individual por parte de la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA, se hubiese realizado bajo los parámetros de libertad informada y transparencia mínimos, porque PORVENIR S.A, ni COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS no cumplieron con su deber legal de brindarle una información adecuada, suficiente, cierta y comprensible sobre las etapas del proceso de afiliación; y sobre los beneficios e inconvenientes que le generaría el traslado del régimen de prima media con prestación definida al de Ahorro Individual con Solidaridad.

Lo anterior queda demostrando cuando los fondos no enlistan ninguna prueba de la asesoría brindada en el momento de cambio de régimen, ni en el momento del reconocimiento pensional.

3. INEFICACIA DEL CAMBIO DE RÉGIMEN:

La Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL1452 de 2019, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, ha precisado claramente el deber de información a cargo de las Administradores de Pensión de fondos de pensiones como un deber exigible desde su creación, para la Corte la incursión en el sistema de seguridad social de nuevos actores de carácter privado, encargados de la gestión fiduciaria de los ahorros de los afiliados en el RAIS y, por tanto, de la prestación de un servicio público esencial, estuvo, desde un principio, sujeto a las restricciones y deberes que la naturaleza de sus actividades implicaba.

En efecto, la jurisprudencia ha entendido que la expresión libre y voluntaria del literal b), artículo 13 de la ley 100 de 1993, necesariamente presupone conocimiento, lo cual sólo es posible alcanzar cuando se saben a plenitud las consecuencias de una decisión de esta índole. De esta forma, la Corte ha dicho que no puede alegarse “que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio allá correspondido a la Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito” (CSJ SL 12136-2014).

4. INTERRUPCIÓN DE CUALQUIER TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN

Es importante mencionar que, la demanda fue enviada por correo electrónico el día 25 de noviembre de 2023, a la oficina de reparto laboral de la ciudad Neiva-Huila, de la rama judicial, correo: RepartoLaboralNVa@cendoj.ramajudicial.gov.co, antes del cierre de horario, es decir, antes de las 5:P.M.

Sin embargo, por error de la oficina de reparto de Neiva-Huila (Rama judicial), lo radicó sólo después de 3 días, es decir, hasta el 28 de noviembre de 2023.

Ahora bien, también es importante aclarar la primera mesada fue pagada solo hasta diciembre 2020, por lo tanto, el reconocimiento pensional se materializó a partir de esta fecha.

Por otro lado, mediante oficios del 20 y 21 de noviembre del 2023 se solicitó a COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A. la nulidad y/o ineficacia del traslado de régimen de Prima Media al de Ahorro Individual, o en su defecto, la indemnización plena de perjuicios a cargo del fondo por trasgredir el deber de información al momento del traslado de régimen pensional.

Por lo que, el termino de prescripción se interrumpió en virtud del artículo 489 del Código Sustantivo del trabajo. Cuando señala:

“El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente”

Así las cosas, igualmente el termino de prescripción quedo interrumpido desde el simple reclamo, es decir, desde el 20 y 21 de noviembre del 2023, cuando se hicieron las reclamaciones iniciales.

Legalmente, existe la posibilidad de interrumpir el término de la prescripción con la reclamación escrita por parte del trabajador en los términos de ley. En dicho caso, el término de prescripción se contabiliza de nuevo a partir de la reclamación, sin que se vea afectado este nuevo periodo por la omisión del empleador en la respuesta de la reclamación escrita.

Así las cosas, indicó el Ministerio del Trabajo, la prescripción es un periodo de tiempo durante el cual el trabajador puede interponer las acciones legales para obtener el pago de sus derechos laborales, que por regla general es de tres años, teniendo la posibilidad durante este periodo de tiempo de reclamar por escrito ante su empleador.

En ese momento se interrumpe la prescripción, es decir, el periodo de tres años o el establecido legalmente para que opere este fenómeno jurídico se contabiliza nuevamente a partir de la reclamación, tiempo durante el cual se puede accionar al empleador.

5. ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE

La Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL1452 de 2019, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, ha precisado claramente el deber de información a cargo de los Administradores de Pensión de fondos de pensiones como un deber exigible desde su creación, para la Corte la incursión en el sistema de seguridad social de nuevos actores de carácter privado, encargados de la gestión fiduciaria de los ahorros de los afiliados en el RAIS y, por tanto, de la prestación de un servicio público esencial, estuvo, desde un principio, sujeto a las restricciones y deberes que la naturaleza de sus actividades implicaba.

En efecto, la jurisprudencia ha entendido que la expresión libre y voluntaria del literal b), artículo 13 de la ley 100 de 1993, necesariamente presupone conocimiento, lo cual sólo es posible alcanzar cuando se saben a plenitud las consecuencias de una decisión de esta índole. De esta forma, la Corte ha dicho que no puede alegarse “que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio allá correspondido a la Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito” (CSJ SL 12136-2014).

El Decreto 663 de 1993, (Estatuto Orgánico Financiero) aplicable a las AFP desde su creación, estableció en el numeral primero del artículo 97, la obligación de “Suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado”.

Dicha información necesaria a la que alude el Estatuto Orgánico Financiero hace referencia a la descripción de características, condiciones, acceso, y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, en un lenguaje claro, simple y comprensible, los elementos definitorios del régimen de ahorro individual con solidaridad y el régimen de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes del servicio, que para el caso de mi poderdante no ocurrió, el asesor del fondo privado sólo habló de las grandes bondades y ventajas del fondo, guardando silencio frente los riesgos o desventajas y mencionado la inminente liquidación del Seguro Social.

6. EXCEPCIÓN GENÉRICA (INNOMINADA)

Esta excepción se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 282 del C.G.P., el cual establece que cuando el juez encuentre probados los hechos que constituyen una excepción, debe reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las excepciones de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deben alegarse en la contestación de la demanda.

PRUEBAS

DOCUMENTAL: Ruego se decrete y tenga como prueba documental, los mismos documentos aportados en la demanda y reforma de la demanda, dentro del proceso ordinario laboral con RAD. 41001310500120230039800 de la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA, contra SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A., COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS Y LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, que aparecen relacionados en el acápite de PRUEBAS del los referidos escritos.

ANEXOS

- Los mismos documentos relacionados en el acápite de pruebas y anexos de los medios de prueba anexados en la demanda y reforma de la demanda dentro del proceso ordinario laboral con RAD. 41001310500120230039800.
- Poder para actuar debidamente conferido al suscrito por la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA.

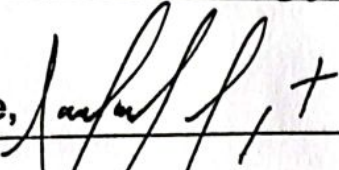
NOTIFICACIONES:

- COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS. Correo electrónico: procesosjudiciales@colfondos.com.co. Obtenido del certificado de Cámara de Comercio y al apoderado correo npantoja@realcontract.com.co obtenido de la demanda de reconvención

PARTE DEMANDANTE:

- **LA DEMANDANTE Y EL SUSCRITO APODERADO correo Electrónico:**
abogado.josefrancisco@gmail.com

Atentamente,



JOSE FRANCISCO CHAVARRO ARIAS
C.C. Nro. 1.075.253.491 de Neiva-Huila
T. P. Nro. 264.268 del C. S. de la Judicatura

Señores

JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE NEIVA HUILA-REPARTO-
Ciudad

ASUNTO: **CONFIRIENDO PODER ESPECIAL LEY 2213 DEL 2022**

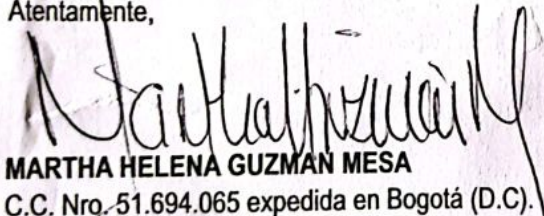
MARTHA HELENA GUZMAN MESA, mayor de edad, domiciliada en Bogotá (D.C.) identificada con la cédula de Ciudadanía número 51.694.065 expedida en Bogotá (D.C.), por medio del presente escrito manifiesto que confiero poder especial amplio y suficiente al Dr. JOSE FRANCISCO CHAVARRO ARIAS, abogado en ejercicio, portador de la T.P. Nro. 264.268 del C.S. de la Judicatura, para que en mi nombre y representación **CONTESTE Y ATIENDA HASTA EL FINAL LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN DE COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**, dentro del proceso Ordinario Laboral con rad. 41001310500120230039800 instaurado contra SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. con NIT. 800.144.331-3, COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS. Con NIT. 800.149.496-2 y la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES.

Mi apoderado queda ampliamente facultado para recibir, transigir, desistir, conciliar, sustituir, reasumir, renunciar, aclarar, como también para contestar, pedir y aportar pruebas, interponer recursos, solicitar medidas y todas las demás facultades propias del encargo en cumplimiento de su mandato, de conformidad con el artículo 77 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarios.

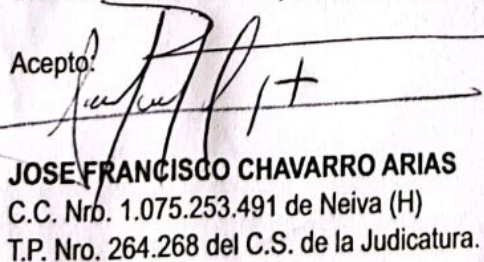
El correo electrónico de mi apoderado es: abogado.josefrancisco@gmail.com


El señor Juez, se servirá reconocer personería jurídica al apoderado, en los términos y para los efectos del presente poder.

Atentamente,


MARTHA HELENA GUZMAN MESA
C.C. Nro. 51.694.065 expedida en Bogotá (D.C.)

Acepto:


JOSE FRANCISCO CHAVARRO ARIAS
C.C. Nro. 1.075.253.491 de Neiva (H)
T.P. Nro. 264.268 del C.S. de la Judicatura.

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL	
Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015 Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012	
En la ciudad de Bogotá D.C. 2024-01-25 08:57:13	
En la Notaría Setenta y Siete (77) del Circuito de Bogotá D.C., compareció:	
GUZMAN MESA MARTHA HELENA identificado con C.C. 0051694065	
Este documento dirigido a	
y manifestó que la firma que aquí aparece es suya y acepta el contenido como cierto. Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.	
 FIRMA	 Cod. 1yxjf  4960-63f48ced
RAFAEL JAVIER PIANETA TERRAZA NOTARIO 77 (E) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.	